

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA TERCERA DE DECISION LABORAL

PROCESO	ORDINARIO
DEMANDANTE	JOSÉ VIDAL SALAZAR RESTREPO
DEMANDADO	Colpensiones y otras
PROCEDENCIA	Juzgado 02 Laboral del Cto. de Medellín
RADICADO	05001 3105 <b>002 2020 00446</b> 01
INSTANCIA	SEGUNDA
PROVIDENCIA	SENTENCIA Nro. 275 de 2022
TEMAS Y SUBTEMAS	Pensión de vejez – Ley 100 de 1993 – bono pensional
DECISIÓN	Modifica y Confirma

Hoy, **dieciseis (16) de diciembre de dos mil veintidós (2022)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral integrada por los magistrados Martha Teresa Flórez Samudio, Orlando Antonio Gallo Isaza y como ponente Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a resolver el **recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de Colpensiones y el grado jurisdiccional de consulta a favor de la misma entidad**, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario promovido por **José Vidal Salazar Restrepo**, en contra de esta entidad, el **Departamento del Guanía, Fiduprevisora y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público**, ésta última vinculada por el juzgado, radicado único nacional 05001 3105 **002 2020 00446** 01.

La Magistrada ponente, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 del 13 de junio del año en curso, procede a emitir sentencia, según proyecto estudiado, discutido y aprobado mediante acta Nro.38 que se plasma a continuación:

## **Antecedentes**

Para lo que interesa a esta instancia, se tiene que el demandante convocó a juicio a la entidad accionada pretendiendo el reconocimiento y pago de **pensión de vejez**, junto con las mesadas retroactivas a partir de la fecha del cumplimiento de los requisitos mínimos legales, más intereses moratorios, y costas del proceso.

En sustento de ello afirma que, nació el 20 de marzo de 1956, por lo que a la fecha acredita 63 años de edad; que se afilió al otrora ISS para realizar aportes desde el 27 de mayo de 1977 hasta el 30 de junio de 2019, acreditando 1182 semanas cotizadas; que se vinculó al servicio de la Gobernación del departamento del Guanía, en el periodo comprendido entre el 17 de febrero de 2011 y el 30 de julio de 2015, equivalente a 229,17 semanas que fueron cotizadas a la Fiduprevisora; que acredita un total de 1.411,17 semanas, siendo su última cotización en el sector privado a través del empleador Vicariato Apostólico.

Agrega que el 27 de febrero de 2018 presentó reclamación administrativa a Colpensiones, solicitando el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, aportando la correspondiente documentación, petición que le fue negada mediante la Resolución SUB227129 del 27 de agosto del mismo año, al considerar que las certificaciones presentaban inconsistencias; que en atención a lo anterior, el 25 de septiembre siguiente, interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, solicitando no condicionar el reconocimiento pensional a la validación puramente formal de la certificación para bono pensional; no obstante, a través de actos administrativos SUB329836 del 26 de diciembre de 2018 y DIR22115 del 27 del mismo mes y año se confirmó la negativa de la prestación.

Que el 16 de abril del año 2019, presentó nueva reclamación ante Colpensiones, la que también fue negada, mediante el acto SUB239371 del 2 de septiembre de 2019, por lo que el 11 del mismo mes y año se interpusieron los recursos de ley que fueron resueltos a través de las Resoluciones SUB259315 del 20 de septiembre de 2019 y DPE12080 del 29 de octubre del mismo año, confirmado el acto administrativo inicial; que en consideración a lo anterior, los días 16 y 23 de octubre de 2019 radicó ante la Fiduprevisora y la Secretaria de Educación de Guainía petición solicitando el traslado de los aportes a Colpensiones; que mediante comunicación del 27 de noviembre la Secretaria de Educación de Guanía remitió dicha petición a la Fiduprevisora sin que se hubiese a la fecha manifestado.

Expone que se vinculó al servicio de la Secretaria de Educación del departamento de Guanía con posterioridad a la expedición de la Ley 812 de 2003, y del acto legislativo 01 de 2005 que establece que los docentes tendrán los derechos pensionales del régimen de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993, y 797 de 2003, por lo cual la negativa de Colpensiones en validar el tiempo laborado para el departamento del Guainía lo indujo en error de continuar cotizando unas semanas que no requería, pues para el 13 de septiembre de 2018, fecha de la notificación del primer acto adminsitrativo que negó el derecho ya contaba con 1.300 semanas.

Una vez **admitida la demanda, el 22 de febrero de 2021**, y debidamente notificadas las accionadas, contestaron así:

**Ministerio de Hacienda y Crédito Público**, por medio de apoderada judicial, frente a los hechos manifestó desconocer lo planteado por cuanto su representada no cumple funciones de administradora de pensiones, por lo cual se atendería a lo demostrado. **Se opuso** a la prosperidad de las pretensiones, formulando excepciones tendientes a enervarlas, las cuales denominó: La Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y

Credito Publico no cumple funciones de Administradora de Pensiones, falta de legitimación en la causa por pasiva e indebida vinculación de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

**Colpensiones**, por intermedio de apoderada judicial, manifestó frente a los hechos, aceptar la afiliación del actor a esa entidad, así como su edad y el contenido de las resoluciones que negaron la prestación solicitada, precisando que ello obedeció a que el afiliado no cumple con los requisitos mínimos establecidos en la Ley 797 de 2003, en la medida, que sólo acredita un total de 1.182 semanas. Se opuso a las pretensiones proponiendo las excepciones de merito que denominó: inexistencia de la obligación de reconocimiento y pago de la pensión de vejez, prescripción, buena fe de la entidad, imposibilidad de condena en costas, improcedencia de la indexación de las condenas y la genérica.

**Departamento del Guainía**, por intermedio de apoderado judicial, adujo respecto a los hechos aceptar el tiempo laborado por el actor para su representada, en cuanto a los demás supuestos, no le constan.

Frente a las pretensiones, expuso en lo relativo a que se ordene a la Secretaría de Educación del Departamento de Guainía remitir a Colpensiones el tiempo laborado, se aportaba al proceso el Certificado Electrónico de Tiempo Laborado, lo que permitía evidenciar que la entidad pública ya suministró la información para la construcción de la historia laboral a los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y del Trabajo, tal como lo consagra la normatividad vigente. Propuso las excepciones de fondo que denominó: inexistencia de la obligación o cobro de lo no debido, falta de legitimación en la causa por pasiva, declaratoria de otras excepciones en los términos del artículo 282 del CGP.

La Fiduprevisora pese a haber sido notificada guardó silencio.

## Decisión de primera instancia

Contenida en sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito, en la que condenó a Colpensiones a:

*a) Reconocer pensión de vejez al señor JOSÉ VIDAL SALAZAR RESTREPO, identificado con la cédula de ciudadanía No 3.452.138, a partir del 20 de marzo de 2018, en cuantía de \$1.046.401, 13 mesadas al año.*

*b) Pagar retroactivo pensional al demandante por el período comprendido entre el 20 de marzo de 2018 y el 31 de octubre de 2022, la suma de \$65.230.435, del cual se autoriza hacer los respectivos descuentos por aportes en salud.*

*c) Pagar intereses de mora desde 28 de junio de 2018 sobre las mesadas adeudadas y hasta el momento en que se haga el pago respectivo.*

*d) Costas y agencias en derecho a cargo de Colpensiones y en favor del demandante, mismas que se liquidarán en el momento procesal oportuno, de conformidad con los arts. 365 y 366 del CGP y acuerdo 10554 del CSJ.*

Argumentó el fallador que conforme al material probatorio, se acreditó que desde el 27 de febrero de 2018, fecha de la primera solicitud realizada por el actor, ya contaba con las cotizaciones y con los certificados de tiempos servidos en el departamento del Guainía, con los que se acreditada las semanas requeridas para acceder a su derecho pensional, sin que para dicho momento existiese ninguna duda que estaban acreditadas las semanas mínimas para el reconocimiento de la pensión de vejez; no obstante, Colpensiones negó el derecho sin justificaicón legal, induciendo en error al afiliado, pues no sólo no se reconoció la pension, sino que le indicó que debía continuar cotizando o que incluso podía solicitar el reconocimiento de indemnización sustitutiva, luego, el fondo demandadado debía reconocer la pensión desde el 20 de marzo de 2018, fecha en que el accionante cumplió sus 62 años, pues a esa data contaba con las 1.300 semanas y era clara su intención de retirarse del sistema para disfrutar de la misma, máxime que conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, los fondos no pueden aducir que las distintas cajas no han expedido el bono para

efectos del reconocimiento pensional, pues las administradoras tienen la obligación de la construcción oportuna de la historia laboral de sus afiliados y de realizar los tramites de los recursos o bonos a que hubiere lugar para el reconocimieto efectivo de las prestaciones.

Frente al cálculo del IBL y el monto, señaló que se tuvo en cuenta hasta la última cotización, 30 de junio de 2019 y se deflactó para establecer el valor de la pensión al año 2018-. Que se calculó el IBL teniendo en cuenta lo cotizado en toda la vida laboral y en los ultimos 10 años, siendo el mas favorable este último, que correspondió a \$1.587.759.00, al que aplicarle una tasa de reemplazo del 68% resultó una mesada pensional por valor de \$1.079.677.00 y al hacer la deflactación se obtuvo una mesada pensional de \$1.046.401.00 para el año 2018.

Respecto al termino prescriptivo señaló no haber operado, al no haberse superado el plazo trienal una vez se hizo exigible el derecho.

Para liquidar el retroactivo pensional efectuó el cálculo cuantificándolo sobre 13 mesadas.

Finalmente, frente a los intereses moratorios señaló ser procedentes al no existir justificación seria para la negación del derecho pese a contar con los requisitos, por lo cual, al haberse reclamado la prestación el 27 de febrero de 2018, estos corrían a partir del 28 de junio del mismo año hasta el pago efectivo de la obligación.

**Inconforme con la decisión anterior, la apoderada de la parte demandante** interpuso recurso de apelación parcial, aduciendo que su inconformidad radicaba sólo frente a la liquidación de la mesada pensional, pues realizando el ejercicio, teniendo en cuenta el ultimo aporte, el calculo del IBL arrojaba un monto levemente superior, pues para el año 2018 el

resultado era de \$1.087.527.00, calculando el valor en los mismos términos señalados al año 2019, con un IBL de \$1.662.478.00, aplicando una tasa de reemplazo de 67.50% y haciendo deflactación hasta el año 2018, arrojando una mesada para 2018 de \$1.087.527.00 y la subsiguiente del 2019, \$1.112.110.00, para un retroactivo desde la fecha señalada por el señor juez, de \$67.944.022, entonces el recurso se limita exclusivamente a la revisión del retroactivo pensional.

La apoderada judicial de **Colpensiones** señala que mediante Resolución SUB252315 del 20 de septiembre de 2019 su representada confirmó el acto administrativo SUB239371 del 2 de septiembre del mismo año, negando la pensión en razón a que la Dirección de Ingresos logró constatar que la Fiduprevisora no había realizado los traslados por el tiempo laborado en el departamento del Guainía, por lo que no era viable tener en cuenta aquel periodo, siendo una situación ajena, resolviéndose de fondo con lo que contaba su poderdante, teniendo que el afiliado no lograba acreditar las semanas requeridas por la ley.

En lo atinente a los intereses moratorios, adujo no proceder pues conforme a la jurisprudencia especializada, el artículo 141 aplica en la mora en el pago de las pensiones causadas en vigencia de Ley 100 de 1993, en los demás casos no proceden, en ese orden de ideas resulta inadecuado acceder a dicho pago.

Por lo anterior solicitó revocar la decisión priminegia, o en caso de confirmarla revisar la liquidación efectuada por el juzgado.

**Dentro del término para ello, la apoderada judicial de Colpensiones allegó escrito de alegaciones**, indicando no ser procedente el reconocimiento de la pensión vejez, pues aunque el actor cumple con el requisito de la edad (62 años hombres), no cumple con las semanas establecidas en la ley 797 de 2003 (1.300 semanas), en la medida que en

la historia laboral registra 976 semanas cotizadas, y conforme a la actualizada al 02 septiembre 2022, el demandante tiene 1.182,00 semanas. Por tal motivo no era posible acceder a dicha pretensión y de contera tampoco a la accesoria de intereses moratorios, al no existir mora en pago alguno.

Por su parte, **la apoderada judicial del demandante** solicitó confirmar la decisión, e insistió en lo planteado en el escrito de demanda, advirtiendo además que en reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional afirmó desde el año 2002, que el no pago del bono pensional no era razón valedera para negar el reconocimiento de una pensión. Recientemente, la jurisprudencia de esta Corporación ha avanzado en el espectro de protección del derecho a la seguridad social en pensiones que se torna fundamental por su íntima conexidad con el derecho al mínimo vital, la salud y las condiciones de vida digna de los pensionados. En consecuencia, la Corte ha afirmado que, así como no puede obstaculizarse ni prolongarse indefinidamente el reconocimiento del derecho a pensión por el no pago del bono pensional, tampoco se puede hacer esto en caso de que exista discusión frente a cuál es el soporte financiero pertinente para el cubrimiento de tal prestación, bono pensional o cuota parte. Desde la sentencia T-235 de 2002, se afirmó, entre otras cosas, que el pronunciamiento de fondo sobre el reconocimiento de pensión se debería dar en un término máximo de seis meses para lo cual no era excusa válida ni el no pago del bono pensional, ni la discusión entre la procedencia de bono pensional o cuota parte; de igual manera, esta sentencia fue clara en afirmar y reiterar que en caso de que sí haya existido pronunciamiento del Seguro Social frente al reconocimiento y en éste haya negado el derecho por la falta de pago de bono pensional, tal acto administrativo se configura en una vía de hecho y en consecuencia debe ser dejado sin efectos por el juez de tutela, aún de oficio.

En orden a decidir, basten las siguientes,



## Consideraciones

Son hechos debidamente acreditados en los autos: la fecha de nacimiento del demandante, el 20 de marzo de 1956; su afiliación al sistema general de pensiones el 27 de mayo de 1977, como trabajador de Almacenes Exito, tal y como consta en la historia laboral visible en las pág 17 y siguientes del pdf. 02 Expediente Digitalizado; que además prestó sus servicios en el sector público, al Departamento de Guainía entre el 17 de febrero de 2011 y el 30 de julio de 2015, como docente - ( pdf.02 Expediente digitalizado págs 49-70); que la historia laboral expedida por la demandada da cuenta de un total de **1.182 semanas** y la certificación electrónica de tiempo laborados CETIL, de **229** semanas laboradas en el sector público no cotizadas al ISS hoy Colpensiones, **para un total de 1.411 semanas en toda la vida laboral**; y que solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez el 27 de febrero de 2018, negada mediante la Resolución SUB 227129 del 27 de agosto del mismo año, en la cual se le indicó que se no se tendría en cuenta el tiempo laborado con el departamento del Guainía al existir inconsistencias en los certificados, concluyendo que no acreditaba las semanas requeridas en los términos de la Ley 100 de 1993, con la modificación de la Ley 797 de 2003; que el anterior acto fue recurrido, siendo confirmado por las resoluciones SUB329836 del 26 de diciembre de 2018 y DIR 22115 del mismo año, indicando en la primera de estas:

Que los tiempos cotizados a otras cajas se relacionan a continuación:

ENTIDAD	ADMINISTRADORA	DESDE	HASTA
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA	FIDUPREVISORA	17/02/2011	30/07/2015

Formatos CLEBS que fueron confirmados por parte de la GOBERNACIÓN DE GUAINIA mediante radicado No. 2018\_16192525 el 21 de diciembre de 2018 sin embargo estos tiempos deben ser financiados por "traslado de aportes."

Como parte de la implementación de los acuerdos de servicios que se requieren elaborar con la Fiduprevisora, quien actúa como administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG y en atención a la mesa de trabajo que se llevó a cabo con la Fiduprevisora el pasado 29 de octubre de 2018, se estableció que dicha entidad no tenía definido un mecanismo para el traslado de aportes pensionales para los periodos posteriores a abril de 1994, razón por la cual se acordó realizar reunión con el Ministerio de Hacienda con el ánimo de definir las directrices para la devolución de aportes entre la Fiduprevisora y Colpensiones.

Por lo anterior se instancio el caso a la Dirección de Historia Laboral, bajo radicado No. 2018\_15846609 donde se emite la siguiente respuesta:

*"Mediante comunicación BZ2018\_16225392 se solicitó a la Fiduprevisora, quien actúa como administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, el traslado de los aportes señalados en su requerimiento.*

Por lo anterior se oficio al FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO con el fin de gestionar el traslado de estos aportes y a la fecha no existe pronunciamiento al respecto.

Así las cosas para el estudio de la pensión de vejez se desestiman los tiempos cotizados a otras cajas hasta tanto el FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO se pronuncie en relación a al mecanismo de financiación.

Expresandole además:

Finalmente se le hace saber al interesada que podrá continuar cotizando para completar los requisitos exigidos en la Ley para acceder a la pensión de vejez (Artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el Artículo 9 de la Ley 797 de 2003) o en su defecto, solicitar la indemnización sustitutiva prevista en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, previa manifestación de la imposibilidad de continuar cotizando al Sistema.

(pdf. 02 Expediente digitalizado págs 95-105). Que posteriormente obra otra reclamación del actor, siendo de nuevo negada a través del acto SUB239371 del 2 de septiembre de 2019 argumentando para el efecto:

Que teniendo en cuenta lo anterior, hasta la fecha no existe pronunciamiento al respecto, por parte de la Secretaria de Educación Departamental del Guainía respecto de la devolución de los aportes efectuados por el periodo de vinculación.

Así las cosas, para el estudio de la pensión de vejez se deben desestimar los tiempos cotizados a otras cajas hasta tanto el FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO se pronuncie en relación al mecanismo de financiación y realice de forma efectiva la devolución de los aportes realizados por el tiempo laborado con la Secretaria de Educación Departamental del Municipio de Guainía.

Decisión que fue recurrida, siendo confirmada por las Resoluciones SUB239315 del 20 de septiembre de 2019, y DPE 12080 del 29 de octubre

de 2019, reiterando lo indicado por el acto inicial. (pdf. 02 Expediente digitalizado págs 113-150); así mismo, está acreditado que según la Resolución 012 del 30 de junio de 2022, la Secretaria de Educación Departamental del Municipio de Guainía reconoce y ordena el traslado de aportes del hoy demandante a Colpensiones así:

**ARTÍCULO PRIMERO:** Reconocer y ordenar el TRASLADO DE SALDO DE APORTES cotizados del señor JOSE VIDAL SALAZAR RESTREPO identificado con C.C. 3.452.138, a favor de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES con NIT: 900.336.004-7 de acuerdo a los considerandos de este acto administrativo, en cuantía de **ONCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE (\$ 11.149.629)** a favor de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES con NIT: 900.336.004-7 conforme a Hoja de revisión de la Fiduciaria La Previsora S.A.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Pagar el valor reconocido en el artículo primero del presente acto administrativo a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES con NIT 900.336.004-7 pagaderos en la cuenta corriente No 000-42003-4 del Banco de Bogotá, pago que se hará a través de la Fiduciaria LA

PREVISORA S.A. como entidad administradora de los recursos del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO S.A.

Así las cosas, teniendo en cuenta los planteamientos de las recurrentes y el grado jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones y el ente territorial, **el problema jurídico** en esta instancia se circunscribe a establecer, si es posible el reconocimiento de pensión al demandante teniendo en cuenta el tiempo servido y los aportes al otrora ISS hoy Colpensiones, y si cumple los requisitos establecidos por la Ley 100 de 1993 modificada por la Ley 797 de 2003; en caso afirmativo, se determinará igualmente, la fecha del disfrute de la prestación, si es viable la imposición de intereses moratorios, examinado además, si la prestación fue correctamente liquidada y si hay lugar o no a imponer condena en costas a Colpensiones.

El artículo 33 de la Ley 100 de 1993 con la modificación de la Ley 797 de 2003 a la letra señala:

**"ARTÍCULO 33. REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE VEJEZ.** <Artículo modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Para tener el derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:

1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si es hombre.

A partir del 1o. de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre.

*2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.  
A partir del 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1o. de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015.*

**PARÁGRAFO 1o.** Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo, se tendrá en cuenta:

*a) El número de semanas cotizadas en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones;*

***b) El tiempo de servicio como servidores públicos remunerados, incluyendo los tiempos servidos en regímenes exceptuados;***

*c) El tiempo de servicio como trabajadores vinculados con empleadores que antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 tenían a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión, siempre y cuando la vinculación laboral se encontrara vigente o se haya iniciado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993.*

*d) El tiempo de servicios como trabajadores vinculados con aquellos empleadores que por omisión no hubieren afiliado al trabajador.*

*e) El número de semanas cotizadas a cajas previsionales del sector privado que antes de la Ley 100 de 1993 tuviesen a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión.*

*En los casos previstos en los literales b), c), d) y e), el cómputo será procedente siempre y cuando el empleador o la caja, según el caso, trasladen, con base en el cálculo actuarial, la suma correspondiente del trabajador que se afilie, a satisfacción de la entidad administradora, el cual estará representado por un bono o título pensional.*

*Los fondos encargados reconocerán la pensión en un tiempo no superior a cuatro (4) meses después de radicada la solicitud por el peticionario, con la correspondiente documentación que acredite su derecho. **Los Fondos no podrán aducir que las diferentes cajas no les han expedido el bono pensional o la cuota parte.***  
*(...)”*

Descendiendo al caso concreto, no existe discusión en que el actor no era beneficiario del régimen de transición, al haber nacido el 20 de marzo de 1956, por lo que conforme a la disposición antes transcrita, para adquirir su derecho pensional debía acreditar 62 años y 1300 semanas, luego arribó **a los 62 años el 20 de marzo de 2018** y se afilió al otrora Instituto de Seguros Sociales desde el año 1977 como trabajador dependiente, cotizando para la entidad un total de **1.182. semanas** entre el 1977 y el año 2019, según se aprecia en la historia laboral visible en carpeta 8 archivo 8.3 pdf; además prestó sus servicios al Departamento de Guainía, entre el 17 de febrero de 2011 y el 31 de julio de 2015, cotizaciones que fueron aportadas al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, en vigencia del Decreto 3752 de 2003, acreditando un total de **229 semanas**, las cuales conforme a la Resolución 012 del 30 de junio de 2022, emitida por la Secretaria de

Educación Departamental del Municipio de Guainía dispuso trasladar a Colpensiones (archivo 41 pdf.), luego, ciertamente, el actor cotizo un total de **1411 semanas** entre lo aportado a Colpensiones y al Fomag, siendo procedente el reconocimiento pensional en los términos en que lo hizo el fallador de primer grado, pues vale anotar que contrario a lo manifestado por la entidad accionada para negar el derecho, frente a las semanas cotizadas en la Fiduprevisora, sí existía pronunciamiento de la Secretaria de Educación del Departamento del Guainía respecto al traslado de los aportes y ya tenía en su poder la respectiva certificación de tiempos laborados CETIL, por el tiempo laborado por la accionante entre 17 de febrero de 2011 hasta 31 de julio de 2015 (lapso posterior a la vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo que conforme al párrafo transitorio primero del Acto Legislativo 01 de 2005, el actor quedaba sometido a ***los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones del artículo 812 de la Ley 812 de 2003***), tal y como se aprecia en la carpeta 08. Contestación Colpensiones, sub carpeta 8.2 c.c. 345218, archivo pdf. 008 GDD-CET-DO-2020\_6590795-20200708121809, máxime que es obligación del fondo realizar las gestiones oportunas y pertinentes para normalizar la historia laboral de sus afiliados, pues como expresamente lo indica la norma antes transcrita (art. 33 Ley 100), *Los fondos encargados reconocerán la pensión en un tiempo no superior a cuatro (4) meses después de radicada la solicitud por el peticionario, con la correspondiente documentación que acredite su derecho. Los Fondos no podrán aducir que las diferentes cajas no les han expedido el bono pensional o la cuota parte,* evidenciándose en este caso, que ya la entidad contaba con toda la documentación que acreditaba el derecho y, **en esa medida entonces habrá de confirmarse en este aspecto la decisión inicial.**

Procederá la Sala a verificar la liquidación de la pensión de vejez causada.

**Del Ingreso Base de Liquidación y tasa de reemplazo:**

En este evento, el IBL debe ser calculado teniendo en cuenta el promedio de los últimos 10 años anteriores al reconocimiento pensional o lo cotizado en toda la vida conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 1993, luego, efecutados los cálculos correspondientes teniendo en cuenta la última cotización (06/2019), se obtiene un resultado más favorable con los últimos 10 años, como se aprecia en las tablas anexas, hallándose con este un IBL de \$1.587.422,02 al que aplicarle el monto correspondiente (68%) hallado conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, arroja **una mesada pensional idéntica a la obtenida por el A Quo**, la leve diferencia obedece a los decimales aplicados, por lo que **debe dejarse incólume este apartado**.

### **Prescripción de mesadas y retroactivo pensional:**

La pensión de vejez y, por ende, su pago completo, se hizo exigible a partir de su causación, no se discute que se reclamó el 27 de febrero de 2018<sup>1</sup>; que la entidad notificó el acto administrativo negando el derecho al reconocimiento pensional en agosto de 2018 y la demanda fue instaurada el 10 de diciembre del 2020, es decir, dentro del trienio previsto en el artículo 151 del CPTSS, por lo que no se configuró este fenómeno extintivo.

En relación con **el pago de mesadas retroactivas desde el 20 de marzo de 2018, por inducción a error**, debe indicarse que esta tesis se basa en que resulte patente y caprichoso el actuar de la entidad al negar la pensión al afiliado que tiene cumplidos los requisitos de edad y densidad de semanas, pues dentro de sus obligaciones está la de custodiar y actualizar la historia laboral, indicándose por la jurisprudencia especializada sobre este particular que: *no es posible hacer responsable al asegurado de los errores de la administradora de pensiones, quien como en esta oportunidad acontece **debió reconocer el derecho***

---

<sup>1</sup> Fecha para la cual conforme a la historia laboral y a la certificación de tiempos laborados –CETIL, **contaba con 1.342 semanas**.



***en su oportunidad, por estar ya satisfechos la totalidad de los requisitos exigidos por los reglamentos del ISS.*** Sentencias 39391 de 2011, reiterada en la 42289 de 2012, en la SL 47236 del 06 de abril de 2016 y en la SL15559-2017.

Y en la sentencia del 5 de abril de 2011, proceso radicado con el número 43564, indicó la Corporación:

*...Y en esa conclusión no encuentra la Sala ningún desacierto fáctico, porque si esa entidad de seguridad social, sin ninguna razón atendible para ello, no le reconoció al actor el derecho a la pensión de vejez cuando debió hacerlo y esa injustificada negativa trajo como consecuencia que aquel continuara cotizando al sistema de seguridad social en pensiones para, luego, poder pedir nuevamente que se le reconociera la prestación, no puede pretenderse que se pase por alto esa situación y que se tome como fecha en la que el demandado incurrió en mora la del vencimiento para dar respuesta a la segunda petición, originada en una equivocada conducta de ese instituto convocado al pleito.*

Y en la SL2061-2021, esbozó el mismo órgano de cierre:

*"Significa lo anterior que con su comportamiento el ISS, ahora Colpensiones, indujo en error al reclamante por la mora en resolver la situación, pues transcurrieron 18 meses entre la solicitud y la respuesta, amén de las tres (3) negativas desde el año 2007 aduciendo falta de requisitos, entre ellos tiempo cotizado, con lo cual acentuó la inducción al yerro, razón por la cual el actor se vio compelido a continuar la vinculación laboral con la entidad pública ESE Hospital de Sabanalarga, así como con otra entidad privada y cotizando en calidad de independiente."*

Criterio que aunque vigente en la jurisprudencia especializada, conocido y aplicado por esta Sala de Decisión cuando a ello hay lugar, no tiene cabida en el caso a estudio, porque si bien Colpensiones negó la prestación sin justificación y ante ello el afiliado se vio compelido a continuar cotizando, no puede desconocerse que el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, permite beneficiarse de tales aportes para efectos del cálculo del IBL y determinación de la tasa de reemplazo, y eso fue lo que aconteció, pues nótese que si se hace el ejercicio matemático y se tienen en cuenta las cotizaciones hasta el mes de marzo de 2018, época para la cual el actor tenía causado su derecho, el IBL se reduce ostensiblemente, siendo mayor al tener en cuenta los aportes posteriores hasta el 30 de junio de 2019, luego, no puede ordenarse el pago de un retroactivo pensional desde 20 de marzo de 2018, como lo

señaló la primera instancia, pues para calcular la mesada dispuesta más favorable, antes referida **(\$1.046.401.oo)** se tuvieron en cuenta las cotizaciones hasta junio de 2019, y precisamente en virtud de ello, el valor aumentó, por cuanto los IBC de ese último año 2019 fueron superiores, por lo cual, aunque en principio hubo una negativa reiterada de reconocer la prestación, lo cierto es, como ya se dijo, para el mes de junio de 2019 se otorga la misma, considerándose IBC mayores, y en esa medida, no podría ordenarse el retroactivo desde marzo de 2018, pues es claro que el actor se benefició de los aportes que efectuó con posterioridad, razón por la cual, no habría lugar a retroactivo desde la causación como se indicó en primera instancia, pues la prestación debe reconocerse a partir del día siguiente a la última cotización, y es que como lo explicó la jurisprudencia especializada en providencia SL470 del 2 de febrero del año 2021: *"El artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990 ordena tener en cuenta hasta la última cotización realizada, pero bajo el entendido que la prestación se empieza a disfrutar con posterioridad a ello, esto es, cuando se presenta el retiro del sistema, ... "*, luego, no podría reconocerse el disfrute de la pensión a partir del 20 de marzo de 2018, cuando para el cálculo de la pensión se tuvieron en cuenta las semanas cotizadas posteriores a dicha calenda, por lo que se impone **modificar** la sentencia revisada en este punto, para en su lugar reconocer el retroactivo pensional desde el **1º de julio de 2019 hasta el 31 de octubre del año en curso**.

Así las cosas efectuadas las operaciones aritmeticas, como se aprecia en el cuadro siguiente, se evidencia el valor adeudado asciende a **\$48.958083.oo**, debiéndose modicar en este tópico la decisión primigenia.

RETROACTIVO PENSIONAL				
Año	IPC	# mesadas	Valor pensión	Total Retroactivo
2019	3,80%	7	\$ 1.079.677	\$ 7.557.739
2020	1,61%	13	\$ 1.120.705	\$ 14.569.161
2021	5,62%	13	\$ 1.138.748	\$ 14.803.725
2022		10	\$ 1.202.746	\$ 12.027.457
			TOTAL	\$ 48.958.083



En atención a lo dispuesto en los artículos 143 de la Ley 100 de 1993 y 42 inciso tercero del Decreto 692 de 1994, la demandada deberá realizar las deducciones para salud a cargo del demandante, respecto del retroactivo pensional, con destino a la EPS a la que esté afiliado, como lo dispuso la primera instancia (sentencia CSJ SL2557-2020 y SL599-2022, entre otras). Punto que se confirma.

**En cuanto a los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993**, objetada su condena por parte de la apoderada de Colpensiones, aduciendo extrañamente que sólo opera para los casos de pensiones causadas en vigencia de la Ley 100 de 1993, **que es justamente lo que aquí ocurre**, por lo que tal argumento no tiene razón de ser, aunado a que la Corte Suprema de Justicia ha aceptado su aplicación para todo tipo de pensiones legales, causadas en vigencia de la Ley 100 de 1993, como da cuenta la sentencia CSJ SL1681-2020, entre otras.

Lo que tiene dicho la jurisprudencia especializada es que los intereses moratorios no proceden cuando el reconocimiento del derecho pensional nace de una creación jurisprudencial, tal como lo ilustra la sentencia SL508-2020 del 12 de febrero de 2020, postura reiterada en sentencias SL-2652, SL2691, SL2912 y SL1947 del año en curso, o cuando existe justificación de orden legal para negar la prestación, lo que en este caso tampoco se presenta, pues la entidad conforme se analizó en acápites anteriores no podía objetar el derecho bajo el pretexto de que no contaba con los aportes del Departamento del Guainía, pues se evidencia la documentación que soporta estos ciclos, los cuales por demás serían trasladadas a favor de la entidad como lo dispuso el ente territorial referido, luego al tratarse de una trámite entre entidades no era viable que el afiliado soportara una carga que no le correspondía y de paso se le negara su derecho pese a estar demostrada su causación, y en esa medida, no existía una justificación legal para el

reconocimiento de la prestación, por lo que se **mantiene esta condena, pero se modifica la fecha a partir de la cual aplican, que lo será el 1º de julio de 2019** y hasta el pago efectivo de las mesadas aquí ordenadas.

Finalmente, respecto a la condena en costas, en la que se incluyen las agencias en derecho, no debe olvidarse que son una simple consecuencia procesal del ejercicio de la acción o de la excepción y se traducen en una obligación que se dirige contra el patrimonio de la parte vencida, pues otorga a favor del vencedor un derecho de reintegro de los gastos procesales en los que se ha visto obligado a incurrir (auto Sala de Casación laboral Corte Suprema del 24 de enero de 2007, radicado 31.155, reiterado en sentencia SL 5141-2019), por lo que resulta procedente confirmar la decisión revisada a en este aspecto.

Sin costas en esta instancia, al no haberse causado. Artículo 365 #8 CGP.

En mérito de lo expuesto, **la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **modifica** la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario laboral promovido por **Jose Vidal Salazar Restrepo**, en contra de **Colpensiones, Departamento del Guainía, Fiduprevisora** y el **Ministerio de Hacienda y Crédito Público** , en cuanto a que el retroactivo adeudado por Colpensiones al señor Vidal, entre **el 1º de julio de 2019 y el 31 de octubre de 2022, corresponde a \$48.958.083; y los intereses moratorios sobre las mesadas adeudadas aplican a partir de la misma calenda, esto es, 1º de julio de 2019.** En lo demás se **confirma**.

Sin costas en esta instancia al no haberse causado. Artículo 365 #8 CGP.

Lo resuelto se notifica a las partes por **EDICTO, que se fijara por secretaria por el término de un día**, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

**Los magistrados** (firmas escaneadas)

  
LUZ AMPARO GÓMEZ ABISTIZABAL  
Magistrada

  
MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO  
Magistrada

  
ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA  
Magistrado